



NO ES PAÍS PARA VIEJOS

Por Belén Declara

¿Es un logro social llegar a viejo para vivir sentado en una silla? Hay que adaptar el sistema a la nueva longevidad.

Estamos acostumbradas a escuchar que España es uno de los países más longevos del mundo. Lo cierto es que ocupa la posición duodécima, con una esperanza de vida que supera los 83 años. No entra, por poco, en el top 10 de los países más longevos, que según la publicación *Our World in Data* de *Naciones Unidas*, encabeza el principado de Mónaco, con 85,9 años de esperanza de vida.

También estamos acostumbradas a escuchar noticias sobre el aumento de la población octogenaria, nonagenaria y centenaria. Según datos del INE, en enero de 2022 había en España casi 20.000 personas con más de 100 años (19.639), lo que supone un incremento del 76% en apenas década. Los octogenarios se han duplicado en los dos últimos decenios. Como curiosidad, la persona más anciana del mundo es española. Se llama María Branyas Morera y tiene 115 años de edad.

Cuando en los medios aparecen noticias sobre alguna centenaria (la gran longevidad es, sobre todo, femenina) con imágenes llenas de ternura y calidez y con mensajes de un positivismo exaltado sobre los logros alcanzados como sociedad, la mayoría de las personas se congratulan de ello y en alguna medida lo sienten como un triunfo. Pero, ¿es realmente un éxito?

Sí, la foto es atractiva, y la noticia nos commueve, pero ¿qué hay detrás de la cámara? Puede haber una silla de ruedas o un caminador, porque los ancianos lo necesitan para desplazarse, un orinal o una cuña, porque no llegan a tiempo al cuarto de baño, o un paquete de pañales, porque ya no controla los esfínteres. También puede haber un babero para no mancharse la ropa cuando comen, unos utensilios de mesa adaptados para poder comer de manera autónoma, alguna prótesis que les ayude en su vida diaria, un baño adaptado, una cuidadora que les ayuda. Y, además, una familia cansada, agotada y emocionalmente afectada porque está lidiando con la decrepitud de su ser querido.

Analizando la situación desde el punto de vista del anciano, se comprende fácilmente que la mayoría de las personas longevas, sino todas, están aquejadas de malestares importantes, tanto físicos como cognitivos, lo que les genera una situación de dependencia. Pero no solo sufren un declive en la salud: sus relaciones sociales y su situación económica también se ven afectadas. La soledad no deseada, por la pérdida de contactos familiares y sociales, se ha convertido en su compañera de vida, sus amistades y los conocidos de su edad van falleciendo y aparece la tristeza y la apatía. Por otra



parte, sus recursos económicos han minguado en relación a los que tenían en sus años de vida activa y no alcanzan a sufragar todos los gastos que su situación genera, que son muchos y muy gravosos.

Nos hemos acostumbrado a considerar un logro social el aumento exponencial de la esperanza de vida en la mayoría de los países. La pregunta es si realmente lo es. ¿Supone un logro llegar a esa edad mantenida por los avances médicos, científicos y tecnológicos para vivir en soledad, con dependencia y sin una calidad y una dignidad de vida aceptables?

Últimamente, los estamentos médicos se están interrogando en este sentido, porque no se trata solo de alargar la expectativa de vida sino de hacerlo con calidad. Se trabaja con el concepto AVAC (Años de Vida Ajustados por Calidad). La AVAC es una unidad de medida que contempla los años de vida ganados con calidad combinados con los perdidos con respecto a un determinado estado de salud, generando una expectativa de vida de los años que le quedan a la persona. El objetivo es realizar comparativas precisas entre expectativa de vida y calidad de vida para saber qué situación elegir para producir el mayor beneficio sanitario posible.

Analizada desde el punto de vista social, la situación tampoco resulta mucho mejor. El envejecimiento de la población nos coloca ante una problemática para la que aún no hemos encontrado una respuesta adecuada. No sabemos cómo gestionar sociológicamente esta nueva situación, no sabemos cómo atender a unas personas que llegan a los 90 o 100 años en unas condiciones no deseables de cuidados paliativos, enfermedades terminales, etc. Hacerlo con calidad genera un aumento de gastos sanitarios y de gastos en cuidados.

Como las instituciones públicas no están preparadas para abastecer toda esta demanda, está surgiendo toda una economía de los ciudadanos, proliferando las empresas asistenciales. Según datos de DBK (observatorio sectorial) hay 5.500 residencias en España que entre todas ofrecen unas 382.000 plazas. Se mueven en total unos 4.600 millones de euros al año. La mayoría, unos 2.600, corresponden a residencias privadas, y unos 1.400, a concertadas. La gestión pública es testimonial.

En cuanto a los cuidados a domicilio, otra modalidad de atención para las personas dependientes que con el tiempo se vuelve insuficiente porque los deterioros se hacen cada vez mayores, suponen un gasto de 1.755 millones de euros.

¿Cómo se paga todo esto? Con el dinero de los propios mayores, gastando todos sus ahorros y vendiendo sus propiedades para conseguir líquido. Los más necesitados, aquellos a los que sus recursos no les alcanzan para asumir tales gastos, deben esperar a obtener una plaza pública, generando listas de espera de años. Según DBK, faltan 11.000 millones de euros solo para cubrir el número de camas de mayores sin plazas. Hace falta más dinero público.



¿No se debería considerar la asistencia a las personas mayores como un derecho universal, igual que la sanidad y la educación? Esto supondría que el estado debería estar preparado para hacerse cargo de ello y no lo está. A pesar de que la población de más edad tiene en España mayor peso demográfico, situación que podría jugar a su favor para conseguir más beneficios para sus necesidades, políticamente no se avanza en este sentido.

Otro problema es el de las pensiones. Según los últimos datos del INE, en España hay 48,2 millones de habitantes. De estos, 13 millones son personas de más de 60 años, es decir, jubiladas (9,7 millones ahora mismo) o a punto de jubilarse. Para complicar más aún la situación, sabemos que los integrantes del llamado *baby boom* se están acercando masivamente al final de su vida activa. Actualmente, son 14 millones de personas las que se mueven en la franja de edad de entre 44 y 64 años. Dentro de muy poco tiempo, habrá casi tantas personas jubiladas como en activo. La pirámide poblacional se está convirtiendo en rectángulo.

El gasto de las pensiones no es como el de educación o la sanidad, que se pagan con los impuestos del año anterior. Las pensiones implican un pacto implícito entre generaciones que consiste en que cada ciudadano asuma pagar las pensiones de hoy con la certeza o la esperanza de que los futuros adultos pagarán la suya. Con estos números, cada pensión del futuro se pagará con los impuestos de una sola persona, cuando actualmente son tres o cuatro las que colaboran para pagar una sola pensión. Las proporciones y los números no dan.

Así las cosas, ¿quién va a pagar estas futuras pensiones?

El estado de bienestar que hemos creado en los últimos años está en riesgo. Se necesitan reformas estructurales tanto a corto como a largo plazo. Políticas de natalidad, empleo y migración pueden ayudar a solventar estos problemas a largo plazo. A corto, se deberían aumentar los impuestos, sobre todo a las grandes fortunas, y establecer un sistema férreo de control de los procedimientos de evasión de impuestos. Son medidas impopulares, pero a falta de imaginación política, las únicas que tenemos al alcance.